

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo Sanz, Diputado del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta escrita, relativa a la **especialización penal de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer**.

En el apartado Veintiocho del artículo 1º de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se da una nueva redacción al artículo 89 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por la que se atribuye a las secciones de Violencia sobre la Mujer el conocimiento de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual, por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, cuando la persona ofendida por el delito sea mujer, para dar cumplimiento a la disposición final vigésima de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, en relación con la especialización en violencias sexuales.

La citada atribución de competencias en materia de violencia sexual a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer entrará en vigor a los nueve meses de la publicación de la Ley Orgánica 1/2025, tal como se recoge en el apartado 3º de la disposición final trigésima octava.

En relación con la naturaleza de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, hay que recordar que tanto el Convenio de Estambul como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, entre otras normas, consideran que las juezas y jueces de violencia deben ser especialistas en la materia. Sin embargo, a fecha de hoy todavía no solo no se ha creado esa especialidad, sino que el Estado tampoco la reconoce; por ello y para cumplir con las meritadas normas, debiera establecerse esa especialidad en las mismas condiciones que, por ejemplo, la Ley Orgánica 1/25 ha reconocido la especialidad a las juezas y jueces de los Juzgados de Familia.

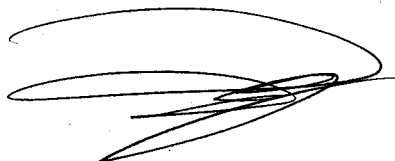
En este sentido, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer deberían tener naturaleza penal, aunque asuman ciertas competencias de derecho de familia mientras esté viva la causa penal, porque esas competencias vienen de la mano y son consecuencia de la necesaria respuesta eficaz y eficiente que merece la víctima de violencia machista. Al igual que los Juzgados de lo Mercantil, que en ocasiones tienen competencia en derecho laboral y en ningún momento se duda de la naturaleza del orden civil al que pertenecen.

Por ello, se formulan las siguientes

PREGUNTAS

¿Tiene previsto el Gobierno establecer por ley que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, o los órganos que en su caso los sustituyan, tengan naturaleza penal, aunque puedan asumir ciertas competencias civiles, en coherencia con diversas normas como el Convenio de Estambul o la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que establecen la especialización de las juezas y jueces de violencia sobre la mujer?

Palacio del Congreso, 11 de marzo de 2025.



Jorge Pueyo Sanz

Diputado